

bro, el precepto «corta por lo sano» y declara aplicable la Ley española 4/2012. En efecto, considérese por ejemplo el caso de una empresa griega que vende un «aprovechamiento por turnos» a un particular español con residencia habitual en Estambul en virtud de un contrato firmado en Grecia y que recae sobre una casa típica situada en la isla de Mikonos. El contrato se negoció en Grecia e indica que la Ley aplicable es la Ley turca. En el caso de controversia judicial que debieran decidir los tribunales españoles, el mencionado art. 17 de la Ley indica que el consumidor (residente en Estambul) podrá invocar la protección jurídica que le otorga la Ley 4/2012 española. Este enfoque legeforista puede incrementar los costes conflictuales de la controversia. Ello obliga a las partes a litigar con arreglo a una ley estatal —la ley española—, cuya aplicación puede comportar costes mucho más elevados que los que supondría la aplicación de la ley griega, que es la ley del país de situación del inmueble y de residencia habitual del transmitente. Una ley cuya aplicación es más previsible para las partes en contraste con la ley española, cuya aplicación al supuesto no es tan previsible.

7.º) Al menos, este art. 17 de la Ley 4/2012, aunque es legeforista, no es «imperialista». Ciertos supuestos no quedan bajo el manto infinito de la Ley española 4/2012. Así, por ejemplo, considérese el caso de un adquirente español con residencia habitual en Valencia que adquiere de una empresa dedicada a comercializar productos de «aprovechamiento por turnos» de inmuebles, una cuota inmobiliaria sobre inmueble situado en las Islas Bermudas. El contrato se negoció y se firmó en Nueva York y se somete a la ley de Nueva York. Pues bien, la ley reguladora del contrato es la ley de Nueva York, y el adquirente no puede hacer valer los derechos concedidos por la Ley 4/2012, ya que el empresario no ejerce sus actividades en un Estado miembro ni tampoco ha dirigido estas actividades a un Estado miembro y, por otra parte, el inmueble no está situado en el territorio delEEE, por lo que no concurren los «puntos de contacto» del supuesto con elEEE requeridos por el art. 17 de la Ley 4/2012. Es una situación no vinculada estrechamente con elEEE, razón por la que la aplicación del Derecho español resultaría inapropiada, al comportar costes conflictuales desmesurados para las partes. Es razonable pensar que tales partes esperen ver aplicada la ley de Nueva York, no el Derecho europeo.

8.º) La Ley 4/2012 resulta también útil para proteger a las personas jurídicas adquirentes de derechos de «aprovechamiento por turnos» (art. 1.2 Ley 4/2012). En efecto, el art. 6 RR-I sólo resulta aplicable a las personas físicas. Por tanto, este «déficit de protección subjetiva» queda ahora cubierto, aunque sólo en el caso de que el contrato se rija por el Derecho material español. Si el contrato se rige por el Derecho de un tercer Estado pero la situación presenta un vínculo estrecho con elEEE, tal y como aparece definido dicho vínculo en el art. 17 de la Ley 4/2012, toda persona jurídica adquirente de estos derechos de «aprovechamiento por turnos» podrá invocar la protección que le dispensa el Derecho europeo a través de la aplicación de la Ley española 4/2012.

Javier CARRASCOSA  
Universidad de Murcia

### 3. EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO EN MATERIA DE SUCESIONES

1. El 27 de julio de 2012, el *DOUE* publicó (L 201, pp. 107-134 y corrección de errores L 60, de 2 de marzo de 2013, p. 140) el Reglamento 650/2012 en materia de sucesiones (RS). Con la adopción de dicho instrumento, las instituciones europeas han culminado un largo trayecto que se inició en los albores de lo que se ha denominado la «comunitarización» del DIPr europeo, porque el Plan de Acción de Viena, de 1998, ya

invitaba a las mismas a examinar, en el plazo de cinco años, la viabilidad de «un instrumento jurídico sobre la jurisdicción internacional, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias relativas a los regímenes matrimoniales y a las sucesiones» [apdo. 41.c) del Plan]. Los hitos principales de este dilatado proceso han sido la entrega, completada el 8 de noviembre de 2002, del «Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les États membres de l'Union Européenne» [DEUTSCHES NOTARINSTITUT (ed.), *Les Successions Internationales dans l'UE. Perspectives pour une Harmonisation*, Würzburg, Deutsches Notarinstitut, 2004, pp. 1-166 (francés) y 169-328 (alemán)], encomendado por la Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior al Instituto Notarial Alemán, bajo la supervisión científica de los profesores H. Dörner y P. Lagarde; la aprobación por la Comisión de las Comunidades Europeas, el 1 de marzo de 2005, del *Libro verde sobre sucesiones y testamentos* [documento COM(2005) 65 final], que mereció sesenta respuestas, analizadas en una audiencia pública celebrada en Bruselas el 30 de noviembre de 2006; más recientemente, el 14 de octubre de 2009, la presentación, también por parte de la Comisión, de la Propuesta de Reglamento (PR) [documento COM(2009) 154 final], que, en los últimos tiempos, ha generado un intenso debate doctrinal cuyos resultados aparecen parcialmente reflejados en el texto definitivo del Reglamento.

2. El mérito más incontestable del nuevo instrumento es el de haber sabido llevar a buen puerto la unificación, a escala europea, del Derecho internacional de las sucesiones; máxime cuando los precedentes —esto es, las vicisitudes por las que el tema había pasado en la Conferencia de La Haya— no hacían prever tamaño logro. Ciertamente, desde 1893, fecha de la *Première Conférence*, se intentó consensuar en el seno de la Organización un convenio sobre los conflictos hereditarios, pero tras los fracasos de los sucesivos proyectos, en particular del más elaborado de todos ellos, el de 1928, la Conferencia abandonó durante casi seis decenios el diseño de confeccionar un texto de alcance general y se conformó con reglamentar determinados aspectos de las sucesiones transfronterizas. Frutos de este replanteamiento fueron el —exitoso— Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias (CLH61), y el —mucho menos secundado— Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973, sobre la administración internacional de las sucesiones (CLH73). Hubo que esperar hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado para que la Conferencia retomara, en el que a la postre se convirtió en el Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989, sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte (CLH89), la empresa de codificar con pretensión omnicompreensiva —no materializada por entero, al renunciar el art. 7 del Convenio a incluir indefectiblemente dentro de la esfera de incidencia de la *lex successionis* las cuestiones relativas a la administración y a la transmisión de la herencia— los conflictos de leyes en el dominio sucesorio. Como habrá ocasión de comprobar, estos tres textos han tenido una gran influencia en la redacción final del Reglamento 650/2012.

3. Si de los antecedentes y del contexto del RS pasamos al análisis de su contenido, vemos que el instrumento se divide en ocho capítulos, el primero de los cuales está dedicado al ámbito material de aplicación y a las definiciones empleadas. En cuanto al radio de acción, el RS, lo mismo que los restantes reglamentos comunitarios atinentes al DIPr que pueden afectar a bienes, lleva a cabo una doble exclusión: por una parte, deja de lado materias de Derecho público como las fiscales, las aduaneras y las administrativas; por otra parte, inventaría una serie de cuestiones que, sin perjuicio de pertenecer al Derecho privado, no tienen cabida en el instrumento. De entre éstas, nos fijaremos en tres. En primer lugar, las correspondientes al régimen económico matrimonial y a los regímenes patrimoniales comparables [art. 1.2.d)], que, en

combinación con la exceptuación de los derechos hereditarios del cónyuge superviviente, que se contempla en el art. 1.3.d) de la Propuesta de Reglamento sobre regímenes económico-matrimoniales (PRREM) [documento COM(2011) 126 final], impide una solución formal objetiva —como la del art. 9.8 *in fine* CC— de los problemas de inadaptación que puedan surgir entre las categorías implicadas, si bien deja abierta la puerta a una adaptación conflictual subjetiva a través de la voluntad del causante y la de los consortes, quienes, respectivamente, tienen la facultad de escoger limitadamente la ley rectora de su sucesión (art. 22 RS) y la que gobierne sus relaciones patrimoniales (art. 16 PRREM), para, si quieren, hacer que coincidan; asimismo cabría un ajuste material, al que parece aludir el cdo. 12 RS, cuando recomienda a las autoridades que sustancien una sucesión que tengan en cuenta la liquidación del régimen económico matrimonial del *de cuius* «para determinar la herencia de éste y las cuotas hereditarias de los beneficiarios». En segundo término, el art. 1.2.g) del Reglamento deja al margen del mismo a las liberalidades, lo que, sin embargo, no obsta, a nuestro juicio, para que, habida cuenta de la función que cumplen —pautar la transmisión del patrimonio de una persona a su fallecimiento—, las donaciones *mortis causa* entren dentro del campo de actuación del instrumento europeo (FONTANELLAS MORELL, J. M., «Las donaciones *mortis causa* ante la reglamentación comunitaria de las sucesiones», *AEDIPr*, XI, 2011, pp. 465-484). En última instancia, nos interesa la suerte del *trust*, porque del tenor final del Reglamento se colige que éste se desentiende de su creación, administración y disolución [art. 1.2.j)], pero que, por el contrario, siguiendo la opinión del Instituto Max Planck (MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW, «Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession», *RabelsZ*, 74, 2010, pp. 556-559), comprende los *testamentary trusts* y los *statutory trusts upon intestacy* respecto de «la cesión de los bienes y la determinación de los beneficiarios» (cdo. 13). Con independencia de la notable dificultad que comporta la interpretación de estas expresiones (PAZ LAMELA, R. S., «La exclusión de los *trusts* del futuro Reglamento "Bruselas/Roma IV"», *AEDIPr*, XI, 2011, pp. 452-455), parece claro que el mencionado considerando apela a la ley sucesoria para evitar que, por medio de la constitución de un *trust*, se puedan sustraer bienes del caudal hereditario en perjuicio de los derechos legítimos de los herederos forzosos.

4. En orden a la competencia judicial —y extrajudicial— en materia sucesoria, vale la pena recordar que, pese a las reiteradas peticiones de, entre otras, la delegación española, el CLH89 nunca se decidió a incorporar normas sobre jurisdicción, siendo esta carencia uno de los déficits primordiales del texto convencional [BORRÁS, A., «La Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort et l'Espagne», en A. BORRÁS *et al.* (ed./coord.), *E pluribus unum. Liber Amicorum Georges A. L. Droz*, La Haya, Martinus Nijhoff, 1996, pp. 9-11]. De ahí que la primera iniciativa que quepa reseñar en esta parcela sea la del GEDIP, adoptada en su reunión de Heidelberg de 1993 (<http://www.gedip-egpil.eu/documents/gedip-documents-3pf.html>), cuyas líneas maestras se recogen en el estudio del Instituto Notarial Alemán [DEUTSCHES NOTARINSTITUT (ed.), *op. cit.*, pp. 43-46 (francés) y 206-208 (alemán)] y están en la base de la regulación del Reglamento 650/2012. En cuanto a ésta, debe antes de nada decirse que, al igual que el Reglamento 4/2009, pero a diferencia del Reglamento 44/2001 y del Reglamento 2201/2003, el RS acoge un catálogo cerrado de foros cuya articulación descarta, en todo caso, el recurso a reglas estatales para atribuir competencia a las autoridades judiciales y extrajudiciales [singularmente, los notarios cuando ejer-

zan funciones jurisdiccionales (cdos. 20 y 21 en relación con el art. 3.2)]. Señalar, a continuación, que, con una cautela difícil de entender en un terreno marcadamente patrimonial, en el que la voluntad de los litigantes habría de tener más protagonismo [GAUDEMET-TALLON, H., «Les règles de compétence dans la proposition de règlement communautaire sur les successions», en G. KHAIRALLAH y M. REVILLARD (dirs.), *Perspectives du droit des successions européennes et internationales*, París, Defrénois, 2010, p. 124], el RS accede a una *prorrogatio fori* en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado cuya ley el *de cuius* ha escogido para regir su sucesión (arts. 5-9), a fin de conseguir siempre que sea posible la coincidencia entre el *forum* y el *ius* (cdos. 27 y 28). Cuando no se efectúe la elección de foro o cuando la misma no sea factible por no concurrir una *professio iuris* o por ser ésta en provecho de la legislación de un país extracomunitario, operan los criterios objetivos de competencia, entre ellos, de manera prioritaria, la residencia habitual del causante al tiempo del fallecimiento, conexión que las más de las veces ha de permitir que el tribunal competente aplique su propio Derecho (art. 4 en relación con el art. 21.1 RS). Si el difunto no tenía a su muerte la residencia habitual en uno de los Estados miembros, mas sí bienes en cualquiera de ellos, los órganos jurisdiccionales del país donde tales bienes estén sitos tendrán subsidiariamente competencia para pronunciarse sobre la totalidad de la herencia si el causante era nacional de dicho Estado o, en su defecto, si había tenido su residencia habitual en el mismo menos de cinco años antes del inicio del pleito sucesorio (art. 10.1 RS). Cuando no se den estas circunstancias, los tribunales del país en que se encuentren bienes relictos serán competentes para dirimir los litigios hereditarios que les incumban (art. 10.2 RS). Esta última regla rompe la idea —presente en toda la regulación— de que el juez apto para conocer decida sobre el conjunto de la sucesión, quiebra que el art. 12 RS extiende a los casos en que se vean envueltos bienes situados en un tercer Estado, en los que el tribunal competente podrá, a instancia de parte, no pronunciarse sobre los citados bienes si teme que su resolución no sea reconocida ni ejecutada en ese país, por ejemplo, por otorgar su normativa competencia exclusiva a sus órganos jurisdiccionales para este tipo de controversias. El sistema se completa con un *forum necessitatis* (art. 11 RS) —no previsto en la PR, pero reclamado por los expertos [BONOMI, A., «La compétence des juridictions des États membres de la Union européenne dans les relations avec les États tiers à l'aune des récentes propositions en matière de droit de la famille et des successions», en LORANDI, F. y STAEHELIN, D. (ed.), *Innovatives Recht. Festschrift für Ivo Schwander*, Zürich/St. Gallen, Dike, 2011, p. 679]— y las usuales normas complementarias tanto reguladoras como de funcionamiento. Para un examen crítico de todo el entramado competencial, véase ÁLVAREZ TORNÉ, M., *La autoridad competente en materia de sucesiones internacionales: el nuevo Reglamento de la UE*, Madrid, Marcial Pons, 2013.

5. En el sector del Derecho aplicable, la ordenación del Reglamento 650/2012 tiene carácter universal (art. 20 RS), o sea, que lleva a observar el Derecho que la misma designa aunque sea el de un Estado no miembro o el de uno de los Estados de la Unión, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, no vinculados por el instrumento (cdos. 82 y 83 RS) se ha inspirado en el CLH89, cuyo ascendiente se percibe no sólo en incontables detalles, sino ante todo en las cuatro grandes decisiones de política legislativa adoptadas —tratamiento unitario de la sucesión, empleo de la última residencia habitual del causante como conexión objetiva, reconocimiento de la profesión de ley, regulación de los pactos sucesorios—, que procedemos a comentar sucintamente. En primer lugar, en el eterno —e irresoluble— debate entre la unidad y el fraccionamiento de las sucesiones internacionales, el RS opta por la aplicación de una sola y misma ley al conjunto de los bienes hereditarios con independencia de su naturaleza mobiliaria

o inmobiliaria y de su lugar de situación, lo que simplifica —la totalidad del *iter* sucesorio es supervisado por una única normativa— y homogeneiza —todo el caudal relicto queda sujeto al mismo régimen jurídico, evitándose soluciones dispares a cuestiones idénticas por razón de la clase o ubicación de los bienes— la transmisión del patrimonio hereditario, pero conlleva el riesgo de que una eventual resolución judicial basada en la *lex successionis* devenga ineficaz cuando el país —extracomunitario— de emplazamiento de los bienes —inmuebles— supedita la sucesión de los mismos a la *lex rei sitae*. En segundo término, el Reglamento consagra como conexión objetiva la última residencia habitual del *de cuius* (art. 21 RS), solución que merece una valoración positiva, porque es mucho más operativa que la del CLH89 —que exigía que la residencia postrera del causante coincidiera con su nacionalidad o, en su defecto, que se hubiera prolongado por un período no inferior a cinco años antes del óbito—, y porque concuerda perfectamente con la preferencia que, en la esfera del Derecho de familia, los instrumentos o proyectos de instrumento comunitarios conceden a la residencia habitual como elemento conectivo personal (véanse el art. 8 del Reglamento 1259/2010 o el art. 17 PRREM). En tercer lugar, el Reglamento 650/2012 admite la *professio iuris*, es decir, la posibilidad de que, en ejercicio de la autonomía conflictual que le es reconocida, el testador escoja limitadamente la ley rectora de su sucesión (art. 22 RS). Con arreglo a este precepto, la designación de ley, obligada a abarcar el conjunto de la herencia, solamente se puede hacer en beneficio del Derecho nacional, tiene que estar contenida en una disposición por causa de muerte, ha de ser materialmente válida según la *lex electa*, y, en lo que concierne a su modificación o revocación, debe disfrutar de un régimen formal análogo al de la modificación o revocación de una disposición de última voluntad. Respecto de la PR (analizada en nuestro trabajo «La *professio iuris* sucesoria a las puertas de una reglamentación comunitaria», *De-reito*, 20, 2011-2, pp. 83-129), la versión definitiva del RS introduce un par de sensibles variaciones: primera, precisa que el profesante puede seleccionar cualquiera de las leyes nacionales que ostente tanto en el momento de la opción como al tiempo del fallecimiento; segunda, advierte que la designación no sólo puede hacerse *expressis verbis*, sino que también vale la verificada tácitamente siempre que resulte indudablemente de los términos de la disposición *mortis causa*. En última instancia, queda la regulación de los pactos sucesorios —a los que el art. 3.1.b) RS equipara explícitamente los testamentos recíprocos—, cuya estructura bilateral blindada la sucesión voluntaria al afectar directamente a la libre revocabilidad del negocio dispositivo por causa de muerte que la ordena. En su art. 25, el Reglamento disciplina el Derecho objetivamente aplicable al contrato relativo a la sucesión de una persona, a la de varias personas, así como la posibilidad de que los otorgantes elijan la legislación rectora del pacto. Tres son los cambios que, en relación con las previsiones de la PR (estudiadas por ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. y RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, I., «La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones», *La Ley*, XXXII, 2011-4, D-407, pp. 1798-1806), incluye el redactado final: la eliminación, en caso de conflicto móvil, de una aplicación alternativa en favor de la validez del pacto tocante a la sucesión de una persona de la *lex hypothetici successionis* (la que habría sido la ley sucesoria si la defunción se hubiera producido el día de la conclusión del acuerdo) y de la *lex successionis*; la sustitución de una solución igualmente alternativa *in favorem validitatis*, fundada en la observancia de la ley potencialmente aplicable a la sucesión de cualquiera de los intervinientes en un pacto referente a la sucesión de diversas personas, por una conexión cumulativa que sujeta la admisibilidad de dichos pactos al visto bueno de la *lex hypothetici successionis* de cada uno de los estipulantes (por contra, la validez y los efectos del contrato quedan en manos de aquel Derecho, de



entre los anteriores, con el que esté más estrechamente vinculado); la supresión de la alusión expresa a la legítima de los terceros, que la *lex hereditatis* protegía frente a una eventual lesión causada por la *lex contractus*; a la luz del cdo. 50 RS, el silencio actual debe interpretarse en el —único— sentido lógico: la ley reguladora del pacto no puede interferir en la protección que la ley sucesoria brinda a los derechos legitimarios de todos los herederos forzosos, hayan participado en el otorgamiento del contrato sucesorio o no lo hayan hecho. De las muchas normas que el instrumento dedica a los conflictos de leyes que todavía restan por comentar, nos detendremos en tres más, en las cuales el texto definitivo se ha apartado del proyecto de reglamentación. Primera, la incorporación, como había solicitado el Instituto Max Planck (MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW, *op. cit.*, pp. 620-624), de una regulación conflictual de la forma de las disposiciones por causa de muerte (art. 27 RS), copiada de la del CLH61, cuyo añadido se ha considerado necesario para unificar las soluciones en este ámbito, teniendo en cuenta que el Convenio de La Haya solamente abarca la validez formal de los testamentos —y no la de los pactos sucesorios u otros negocios mortis causa— y que once países europeos no lo han suscrito. Ahora bien, para los Estados comunitarios, como España, que son parte del CLH61, éste continuará primando sobre el Reglamento 650/2012, de conformidad con el art. 75.1 del mismo. Segunda, contradiciendo lo que preceptuaba el art. 26 PR —y lo que preceptúan el art. 20 del Reglamento 593/2008, el art. 24 del Reglamento 864/2007, y el art. 11 del Reglamento 1259/2010—, el art. 34 RS da entrada al reenvío —de primer y de segundo grado—; decisión a nuestro parecer muy desafortunada, ya que, como se ha evidenciado en la práctica jurisprudencial española —especialmente a propósito de las sucesiones— este mecanismo remisivo constituye un foco permanente de inseguridad jurídica, que, la alambicada redacción del Reglamento 650/2012, no ayudará a disminuir. Tercera, del art. 35 RS ha desaparecido el segundo apartado que contenía el art. 27 PR, en el que, con la loable finalidad de facilitar la armonización conflictual en el seno de la Unión, se especificaba que las disparidades legitimarias entre los ordenamientos de los Estados miembros no habían de servir de pretexto para la intervención del correctivo del orden público. Carente a la postre el Reglamento de una fórmula concreta, la tutela de la legítima está al cuidado de la cláusula general del art. 35 RS, cuya operatividad frente a una eventual vulneración de los derechos hereditarios que la ley del foro atribuya a los sucesores necesarios podrá variar de un país al otro [véase, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., «Las legítimas en el Reglamento sobre sucesiones y testamentos», *AEDIPr*, XI 2011, pp. 385-388].

6. A la vista de que el régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones, documentos públicos y transacciones judiciales que establece el Reglamento 650/2012 se amolda, con pocas novedades, a los parámetros comunitarios que son tributarios del Reglamento 44/2001, nos ocuparemos finalmente de una de las grandes aportaciones del nuevo instrumento: la creación del «certificado sucesorio europeo» (CSE). Este documento tiene un precedente en el «certificado internacional» instituido por el CLH73, aun cuando este último tenía un alcance mucho más modesto, pues sólo confería poderes para administrar la herencia mobiliaria. Las instituciones comunitarias, conscientes de que la tramitación de las sucesiones transfronterizas debe ser lo más ágil y eficiente posible, han dado carta de naturaleza a este certificado uniforme, que, sin embargo, ni es obligatorio ni sustituye a los documentos internos de los Estados miembros (art. 62 RS). El CSE se expedirá, para poder utilizarse en otro país comunitario, por las autoridades del Estado cuyos tribunales —entendidos en el sentido lato del art. 3.2 RS— tengan competencia judicial internacional para la tramitación de la sucesión (art. 64 RS), y servirá para acreditar la cualidad y/o los derechos de los herederos y legatarios,

así como las cuotas hereditarias de los mismos, la atribución de bienes concretos a los sucesores y las facultades de la persona designada en el certificado como ejecutor testamentario o administrador de la herencia (art. 63 RS). Sin necesidad de acudir a ningún procedimiento ad hoc, el CSE surtirá en todos los Estados miembros sus dos efectos fundamentales: el probatorio —se presumirá que el certificado prueba los extremos en él testimoniados (art. 69.2 RS)— y el de protección de terceros de buena fe —cualquiera que entregue bienes a una persona o los reciba de otra que, según el certificado, esté facultada para, respectivamente, percibirlos o enajenarlos, se beneficiará de la presunción de legitimación del adquirente o del transmitente (art. 69.3.4 RS)—. Por contra, el CSE no tendrá fuerza ejecutiva (cdo. 71 RS); y, en cuanto a la eficacia registral, el certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en un registro público (art. 69.5 RS), pero el acceso al mismo dependerá del cumplimiento de los requisitos que exija la ley del país del registro, siendo asimismo esta legislación la que gobernará las consecuencias derivadas de la inscripción —o no inscripción— del certificado [HEREDIA CERVANTES, I., «El nuevo reglamento europeo sobre sucesiones», *La Ley*, XXXIII, 2012, semanal 4 (24-30 de septiembre), p. 23].

7. Acabaremos resaltando que, por su ambición, sus dimensiones y su complejidad, el Reglamento 650/2012 —íntegramente aplicable a partir del 17 de agosto de 2015— está llamado a jugar un papel preeminente en el DIPr comunitario del futuro. Efectivamente, por un lado, su propósito de regular por completo —esto es, desde todas las vertientes de nuestra disciplina— el Derecho sucesorio internacional; y, por otro lado, su extensión —84 artículos— ponen de relieve la amplitud y diversidad de las cuestiones abordadas, lo que, unido a la problemática que las mismas suscitan, permite vaticinar una ímproba labor exegetica, que va a tener sumamente ocupados a los internacionalprivatistas durante los próximos años.

Josep M. FONTANELLAS MORELL  
Universitat de Lleida

#### **4. COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1961 SOBRE SUPRESIÓN DE LA LEGALIZACIÓN (6 A 9 DE NOVIEMBRE DE 2012)**

1. Constituye ya una tradición en los Convenios de La Haya que implican una cooperación de autoridades de los Estados miembros la convocatoria de Comisiones Especiales para el control del funcionamiento de los Convenios y, de esta forma, se han celebrado diversas reuniones de Comisiones Especiales sobre diversos Convenios.

En este caso, la novedad respecto a las reuniones anteriores en materia de cooperación judicial civil radica en que es la primera vez que se examina únicamente el funcionamiento del Convenio de 1961 en materia de supresión de la legalización (Convenio Apostilla), ya que en 2003 y 2009 (véase nota de A. BORRÁS en *Revista Española de Derecho Internacional*, 2009-1, pp. 320-326) se examinó juntamente con otros Convenios de cooperación, el Convenio de 1965 sobre notificaciones en el extranjero, el Convenio de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero y, en 2009, el Convenio de 1980 sobre acceso a la justicia. En este caso, es de destacar la presencia de Estados que no son todavía parte en el Convenio, pero tienen intención de adherirse al mismo y de Estados que, siendo ya parte en el Convenio, desean implementar la apostilla electrónica. Toda la información puede encontrarse en la página web de la Conferencia, <http://www.hcch.net>, en la «Sección apostilla».